

Manifiesto conjunto de repudio sobre el uso de la violencia contra las comunidades en Colombia y su legítimo derecho a la vida digna y la protesta.

Roma, 10 de octubre de 2017.

Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro profundo dolor y desconcierto ante el aumento de la violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Los índices van en aumento desde que se firmó la paz con las FARC, 225 amenazas, 51 asesinatos, 32 atentados, 18 detenciones arbitrarias y 9 casos de judicialización (Programa Somos Defensores, junio 2017) y más de 200 líderes sociales asesinados para las mismas fechas (Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, octubre 2017).

A esta vergonzosa lista se han sumado las 8 personas asesinadas la semana pasada en el departamento de Nariño causada por la política de erradicación forzosa del cultivo de hoja de coca por parte del gobierno nacional, sin cumplimiento de lo establecido en los acuerdos, respecto a la erradicación voluntaria y con garantías, en una clara manifestación de criminalización de la protesta y violación de sus derechos fundamentales. Situación agravada por el ataque por parte de la fuerza pública a la comisión humanitaria constituida por ONU, OEA, Defensoría del Pueblo, entre otros; la cual buscaba verificar lo sucedido. Así mismo, el asesinato de Efigenia Vásquez, comunicadora indígena en manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD en el Cauca y la muerte del líder comunal Jorge Luis García, en su casa en Cartagena.

Es claro que el país vive hoy una profunda coyuntura, con consecuencias que pueden afectar profundamente sus estructuras políticas, sociales, culturales y ambientales. Aquí se pone en juego la posibilidad de construir un nuevo país que resuelva sus profundas condiciones de inequidad, injusticia y exclusión, como las fuentes fundamentales de las cuales ha bebido el conflicto en sus más diversas formas.

Las organizaciones, procesos y movimientos sociales han mostrado su voluntad en avanzar hacia la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC. El gobierno colombiano debe garantizar las condiciones para una participación verdaderamente efectiva, cumpliendo los compromisos adquiridos en acuerdos y pactos internacionales sobre derechos humanos, derechos colectivos, así como la protección y el cuidado del ambiente.

Hacemos un llamado a avanzar en la implementación de las directrices de la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, a tener en cuenta los derechos de campesinos, campesinas, trabajadores y trabajadoras rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes. También a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades en su legítima intención de defender, construir y apropiarse los territorios que garantizan su reproducción social como grupo, pueblo o comunidad, por lo tanto, acompañamos la semana de la indignación promovida por los movimientos sociales en Colombia del 9 y 13 de octubre, en rechazo a la criminalización y asesinato de líderes sociales y defensores de DDHH.

Seguimos creyendo en la paz, en el diálogo y la reconciliación, pero en una paz que no deje por fuera los diversos sectores sociales populares, en el reconocimiento de sus diferencias y la potencialidad de sus propuestas construidas por años, aún en medio de la guerra. A las organizaciones internacionales, movimientos sociales, estados garantes y a los que se han mostrado cercanos a este proceso, les pedimos que sigan acompañado este camino hacia la paz incluyendo los diálogos actuales con el ELN.

Apoyan este Manifiesto conjunto:

Red Nacional de Agricultura Familiar
Censat Aguaviva Amigos de la Tierra Colombia
Fian Colombia
Vía Campesina Internacional
Corporación Casa de la Memoria